

Nueva cultura del territorio y renovada acción política desde la ciudadanía

Marc Andreu

El año 2007 estuvo políticamente marcado por las elecciones municipales del 27 de mayo, su elevada abstención (36% en España, 46% en Cataluña y hasta superior al 50% en Barcelona) y voto en blanco (que rondó un significativo 3%), así como por la proximidad de las elecciones generales del 9 de marzo de 2008. «En nuestros barrios se constata una situación de relativismo y cierto desánimo políticos, reflejo de la situación social de precariedades crecientes y, en general, de inseguridad por el mañana, que inhibe la participación ciudadana en los asuntos colectivos y cierra a las personas en el individualismo excluyente ante los fenómenos de cambios poblacionales con los recién llegados», rezaba una resolución de la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya (Confave) en su 22ª asamblea, celebrada en abril bajo el significativo lema *Por la cohesión social y territorial*. En la capital de España, por su parte, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) celebraba el 23 de mayo, a cuatro días de las elecciones, una junta extraordinaria que relevaba a Francisco Caño por Ignacio Murgui al frente de la entidad tras la crisis desatada días antes al firmar Caño, sin consultar a las asociaciones federadas, un programa de acuerdos con el candidato del PP luego reelegido alcalde por mayoría absoluta, Alberto Ruiz-Gallardón. En este contexto, el movimiento vecinal del conjunto del Estado español —cuya fuerza y vitalidad sigue midiéndose de forma desigual por barrios, ciudades, federaciones y confederaciones pese a muestras significativas, aunque contadas, de rejuvenecimiento— dio en 2007 varias señales de su capacidad para renovar la acción política desde la ciudadanía y expandir una nueva cultura del territorio.

Ello no es atribuible sólo a las asociaciones de vecinos, que las hay de todo tipo, sino a la interrelación del plural movimiento vecinal con plataformas y grupos que, sin una visión tan global del barrio, la ciudad, el territorio o la ciudadanía, plantean una oposición activa a determinadas políticas o iniciativas de los poderes públicos y privados. Como admite la antropóloga y presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), Eva Fernández, «se trata, sin duda, de una situación atomizada y compleja, pero tremendamente rica y, sobre todo, que parece desmentir ese pretendido desinterés por las cosas públicas».^[1] Todo ello, junto con otros indicios, contribuye a afianzar la hipótesis de que esos movimientos sociales definidos como *segunda superpotencia* durante el intenso ciclo de movilizaciones 1999-2004 no necesariamente han desaparecido ni se han debilitado, sino que se han reubicado, arraigándose en sus contextos locales y centrándose más en lo cotidiano, sin abandonar por ello las conexiones globales^[2] ni su capacidad de incidencia política y mediática. Aunque por acontecimientos distintos, Salamanca y Cataluña sintetizaron en diciembre de 2007 la cara y la cruz de esa moneda que, acuñada con esfuerzos que van más allá de este año y estas geografías, circula ya como prueba de que el movimiento vecinal o ciudadano es un renovado actor político.

Salamanca y Cataluña, cara y cruz

Convocadas por la Federación de Vecinos de Salamanca (Fevesa), las más de 20.000 personas que el 26 de diciembre llenaron por tercera vez en pocas semanas la plaza Mayor de la ciudad castellana en protesta contra la subida de tasas municipales de servicios básicos como el agua, la recogida de basuras y la contribución aprobada por el alcalde Julián Lanzarote (PP) se convirtieron en un poderoso ariete político. Lo demuestra que, con el apoyo de la FRAVM y de todos los sindicatos y partidos de izquierda, la movilización vecinal salmantina se trasladara el 26 de enero de 2008 a la capital del Estado, cuando unas 3.000 personas —Fevesa fetó 17 autocares desde Salamanca— se concentraron frente a la sede del Partido Popular reclamando unos «impuestos justos». A escasos meses de las elecciones generales de marzo, la masiva protesta ciudadana contra un recién reelegido alcalde de la derecha trascendió el marco local y fue lógicamente aprovechada por la izquierda política. Más allá de lecturas partidistas o electoralistas, conviene preguntarse por qué.

No es aventurado apuntar que, aún sin formar parte de una predeterminada estrategia, la protesta salmantina llegó justo en tiempo y forma para empezar a encauzar una inquietud ciudadana generalizada: el temor a la crisis económica que, a finales del 2007, se avizoraba a la vuelta de la esquina. El año se cerró en las ciudades de toda España con subidas considerables de las hipotecas y de varios productos y

servicios básicos: pan, leche, huevos, transporte público, butano, energía eléctrica y gas. En conjunto, se encarecieron un 2% más que la cifra media acordada de incremento salarial. Está por ver cómo evoluciona todo en 2008, pero no es descabellado sostener que en Salamanca —particularidades locales al margen y salvando la distancia histórica— el movimiento vecinal retomó en cierto modo una de las dos grandes

luchas que a mediados de los años setenta impulsaron a las asociaciones de vecinos en el centro de España: la denominada *batalla del pan y contra la carestía de la vida*. Una batalla que, junto con la larga lucha por la remodelación de barrios en Madrid, se convirtió inmediatamente en un movimiento político por las libertades civiles que confluyó con las reivindicaciones vecinales de otras ciudades y, especialmente, con el potente movimiento vecinal catalán. Cabe recordar que la por algunos erróneamente considerada primera gran manifestación de la transición, que el 22 de junio de 1976 reunió a 50.000 personas en la calle Preciados de Madrid, fue convocada contra la carestía de la vida y por la legalización de las asociaciones de vecinos... a imagen y semejanza de las igualmente concurridas marchas que en Barcelona, el 1 y 8 de febrero de 1976, convocó directamente por las libertades y la amnistía la Asamblea de Catalunya, bajo el paraguas legal de la FAVB.^[3]

Sirva esta digresión histórica para darle la vuelta a la moneda que introduce este repaso al año vecinal y pasar de la cara de Salamanca a la cruz de Cataluña, marcada en 2007 por la denominada crisis de las infraestructuras. Una crisis estructural que acusó años de falta de inversión del Estado y de grandes compañías de servicios como Renfe y Fecsa-Endesa —pero también dejadez de la Generalitat—, y que se concretó en un apagón eléctrico que a finales de julio afectó a decenas de miles de barceloneses y un colapso del servicio ferroviario de Cercanías que en otoño afectó a otras decenas de miles de vecinos y trabajadores del área metropolitana de Barcelona, particularmente de la comarca del Baix Llobregat. Con un carácter casi testimonial, la FAVB trató de organizar en agosto una protesta ciudadana por el apagón eléctrico en la capital catalana. Pero el poco éxito de aquella convocatoria veraniega no alcanza a explicar por qué, en otoño, el conjunto del movimiento vecinal y sindical de Cataluña (y en especial CCOO), que históricamente han liderado junto con colectivos ecologistas a la plural izquierda social en cuestiones de movilidad, sostenibilidad y movilización urbana, se dejaron robar la hegemonía cultural, en términos gramscianos, por el independentismo cívico interclasista a la hora de encauzar la indignación ciudadana por el colapso ferroviario. Descartada por falta de reflejos, de acuerdo interno y de confianza movilizadora la idea de una gran protesta ciudadana contra el caos ferroviario que barajaron inicialmente CCOO y el movimiento vecinal catalán, en la izquierda social sólo la FAVB y la Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) tuvieron la cintura de sumarse a la manifestación que se adelantó a convocar para el 1 de diciembre la soberanista Plataforma pel Pret de Decidir. Para sorpresa de propios y extraños, ese día salieron a las calles de Barcelona más de 200.000 personas bajo el lema *Som una nació i diem prou. Tenim el dret de decidir sobre les nostres infraestructures*.

Fue una manifestación histórica, solo superada en dimensiones por las movilizaciones en contra de la guerra de Irak. Y, aunque de tono predominantemente nacionalista e independentista, la protesta tuvo motivaciones diversas y complejas y un carácter social y políticamente muy transversal. Ilustrado, por ejemplo, con la asistencia de dos expresidentes de Cataluña: el nacionalista Jordi Pujol y el socialista Pasqual Maragall. El éxito de la manifestación fue política y periodísticamente inesperado pero, en cierto modo, social e históricamente previsible a tenor de la indignación general por el recuerdo del apagón y, sobre todo, la afectación que la crisis ferroviaria causada por años de desinversión y las prisas electoralistas en las obras del AVE generó en la vida cotidiana de decenas de miles de trabajadores y vecinos. Hubo, pues, motivos concretos para salir a la calle, que se sumaron al difuso malestar ciudadano por el déficit general de inversiones y financiación pública en Cataluña y por el recorte y bloqueo político del nuevo Estatuto. Si la iniciativa y el éxito de la protesta pudo capitalizarlo el soberanismo es porque le robó la cartera a una izquierda social falta de reflejos o demasiado renuente a manifestarse cuando quien gobierna es la izquierda política: en este caso, el tripartito PSC-ERC-ICV-EUiA en Cataluña y el PSOE en España. Los sindicatos mayoritarios y los socialistas se autoexcluyeron de la movilización por un error de cálculo más o menos reconocido a posteriori,^[4] mientras que la Confavc desdibujó su participación por celos frente al protagonismo de la federación vecinal barcelonesa. Y es que la FAVB, junto con la PTP, aun percibiendo el riesgo de instrumentalización política de CiU y ERC por su sintonía con la plataforma soberanista convocante, entendió que el movimiento vecinal no podía quedar al margen de una protesta con bases y reivindicaciones eminentemente sociales, amén de nacionales. Sin abandonar el trabajo de fondo por otro modelo de movilidad urbana llevado a cabo junto con CCOO, de la FAVB y la PTP fue el mérito de que en el manifiesto y el transcurso de la marcha del 1 de diciembre se visualizara la explícita reivindicación de una mejora del transporte público ferroviario. Precisamente el argumento que esgrimió

la izquierda ecosocialista y comunista de ICV-EUiA para sumarse finalmente a una convocatoria que desdeñaron PSC, CCOO y UGT. Consideraciones partidistas al margen, lo relevante es que la históricamente bien organizada izquierda social catalana —y en parte por falta de reflejos del movimiento vecinal, aunque mayor fue la responsabilidad del sindical— perdió en su propio terreno de juego la hegemonía cultural movilizadora frente al menos estructurado, pero creciente e ideológicamente transversal, soberanismo cívico.

Ejes de actuación y retos internos

Queda claro que, en 2007, Salamanca y Cataluña fueron el ejemplo de que el movimiento vecinal recupera relevancia a la hora de encauzar (o no) movimientos ciudadanos y territoriales más amplios y con clara repercusión política. A saber: contra el encarecimiento de la vida y el abuso fiscal, mala gestión y despilfarro —cuándo no corrupción— de las administraciones locales, que es lo que ejemplifica el caso salmantino, y contra la falta de inversiones en infraestructuras y por otro modelo de crecimiento y movilidad urbana, en el caso catalán. Dos grandes motivos de reivindicación ciudadana que se suman al clamor popular por el derecho a una vivienda digna que marcó 2006 y tuvo continuidad en 2007. Para el movimiento vecinal, el año estuvo marcado por estos tres ejes de actuación preferente, junto con otros dos de gran relevancia en un contexto de elecciones municipales, más quizá un sexto eje en ciernes. A saber: la batalla de la participación ciudadana y la definición de modelos de ciudad alternativos, que se abordan al final de este trabajo desde una perspectiva comparada Madrid-Barcelona. Y, en cierto modo vinculado a estos últimos ejes, la incipiente divulgación de la memoria histórica, de reflexiones teóricas y de experiencias concretas del movimiento vecinal o ciudadano, entendido en un sentido amplio que sobrepasa el estricto marco de las asociaciones de vecinos.

A todo ello hay que añadir que el movimiento vecinal ha seguido teniendo enfrente en 2007 dos retos de carácter interno u organizativo que arrastra de tiempo atrás y que parece que empieza a enhebrar. Uno es el rejuvenecimiento o relevo generacional, que representan el treintañero nuevo presidente de la FRAVM, Ignacio Murgu, el veintañero presidente de Fevesa, Chema Collados o, en Barcelona, jóvenes dirigentes de las asociaciones de vecinos de Sant Andreu, Sagrada Família y Prosperitat, así como muchas mujeres de las renovadas juntas vecinales de los barrios de Vallbona y Trinitat Nova. El otro reto es el de la convivencia —léase colaboración o enfrentamiento, según los casos— con otras realidades asociativas locales: desde plataformas de todo tipo, algunas de ellas incluso de carácter populista o reaccionario, a colectivos alternativos como el okupa.

Sobre la lucha por la vivienda, cabe consignar que el movimiento inicialmente espontáneo de 2006 volvió a sacar de nuevo a decenas de miles de personas a la calle en 2007. Pese a que el poder político cortocircuitó en enero, combinando la deslegitimación y la represión preventiva, que el movimiento-acampada de Los Hijos de Don Quijote de París se extendiera a Barcelona, en esta y otras ciudades del Estado español se repitieron convocatorias masivas simultáneas para reivindicar el derecho a la vivienda como las del 24 de marzo, además de otras muchas acciones locales. En este contexto, el movimiento vecinal tuvo que lidiar, mediáticamente y en debate interno, al menos en el caso de Barcelona, con una nueva oleada de criminalización del fenómeno okupa. Y presenciar, en el caso de Madrid, la batalla campal con 41 heridos que el 18 de octubre se vivió en la Cañada Real Galiana al enfrentarse decenas de vecinos inmigrantes a la policía para evitar el derribo de una de las 2.000 viviendas ilegales existentes en este poblado periférico. Subió enteros en la agenda de las asociaciones de vecinos tanto la denuncia del denominado *mobbing* inmobiliario como la reivindicación de vivienda protegida en los planes de barrio. Al respecto, y aunque avalados con un *sí crítico* por sus recortes en beneficio del sector inmobiliario, la ley y el plan nacional de la vivienda aprobado en Catalunya recogen en parte frutos sembrados desde hace años por el movimiento vecinal. Que se mantuviera en la ley catalana un emblemático artículo que permite el alquiler forzoso de pisos vacíos —disposición que la derecha de CiU y PP impugnó y que los socialistas estaban dispuestos a retirar contra la voluntad de sus socios de Gobierno, ecosocialistas y republicanos— es en buena parte debido a la amenaza del movimiento vecinal y sindical de no firmar un pacto de vivienda excesivamente descafeinado.

Esta es otra prueba de la renovada capacidad de incidencia política del movimiento vecinal, aunque limitada e insuficiente para resolver la problemática de la vivienda. Por ello en diciembre seguía viva la que fue calificada de rebelión *mileurista* de «hijos de las clases medias» que «prestan su voz a otros colectivos sin capacidad de movilización, para los cuales la vivienda está agravando situaciones

personales y familiares de riesgo».^[5] Con todo, en el 2007 no se produjo la anunciada, por algunos, «confluencia de las movilizaciones por la defensa del territorio con las manifestaciones por una vivienda digna» tras un *in crescendo* que coincidiendo con las elecciones municipales debía «obligar al poder político a dar una respuesta ante este estado de cosas, pero sin esperar gran cosa de él».^[6] A no ser que entendamos como máxima expresión política de esta pregonada confluencia el aumento de la abstención y el voto en blanco, inoperante por sí solo para ahuyentar del poder local las prácticas políticas corruptas, insolidarias, injustas o insostenibles. Hubo, eso sí, iniciativas y experiencias que contribuyeron a poner sobre la mesa de todos los movimientos sociales, antes y después de las elecciones municipales, que la participación ciudadana y otros modelos de crecimiento urbanístico y de ciudad son banderas tradicionales pero no exclusivas del movimiento vecinal que posibilitan gran capacidad de incidencia política y transformación social.

Al margen de realidades que se analizan más adelante, fiel reflejo de ello fueron tanto la Convención de Movimientos Sociales de Madrid, promovida en octubre por la FRAVM, como la participación de asociaciones de vecinos en el proceso que alumbró, en enero del 2008, al Fòrum Social Català (FSCat). Del mismo modo que no es gratuito titular que «Las luchas comunitarias emergen desde los barrios» al hacer una panorámica periodística sobre los movimientos sociales en Andalucía.^[7] Igualmente, y dentro de ese incipiente sexto eje antes mencionado, cabe citar casi media docena de libros como expresión editorial de ese volver a tejer, cual moderna Mariana Pineda, las viejas banderas del movimiento ciudadano. Más prolífica Catalunya que el resto del Estado, títulos del 2007 como *Per una nova cultura del territori? Mobilitzacions i conflictes territorials*; *De la protesta al contrapoder. Nous protagonismes socials en la Barcelona metropolitana*; *La ciudad mentirosa. Fraude y miseria del 'modelo Barcelona*, y *Madrid: ¿la suma de todos? Globalización, territorio, desigualdad llenan*, citando un extrapolable párrafo del prólogo de esta última obra, «un vacío casi absoluto, ya que aparte de la experiencia cotidiana de atravesar la ciudad y de la machacona propaganda institucional, no existían (y todavía no existen) suficientes monografías, estudios, cartografías que intentasen analizar las transformaciones en curso».^[8] A otro nivel, cabría citar también aquí el libro *Carrer. 15 anys / 100 números*,^[9] que dio cuenta de la historia del bimestral barcelonés *La Veu del Carrer*. La revista de la FAVB es quizá la iniciativa viva de periodismo vecinal más antigua y relevante,^[10] que desde 2005 convive con cabeceras de referencia geográfica y temática más amplia para los movimientos sociales, pero con fuerte impronta local, como el quincenal madrileño *Diagonal* y el semanario catalán *Directa*. Precisamente el ambicioso monográfico número 100 de *Carrer*, presentado en febrero de 2007 y significativamente titulado *Ciutat i poder. Qui mana a Barcelona?*, es otro ejemplo del esfuerzo del movimiento vecinal por actualizar su agenda reivindicativa con mayor voluntad de incidencia mediática y política.

Aún así, lo que más relevancia mediática y política sigue dando a las asociaciones de vecinos es el trabajo y las luchas comunitarias, que a su vez facilitan cierta renovación generacional por contacto en red con otros movimientos sociales. Sin ir más lejos, la movilización salmantina contra la subida de impuestos dio relevancia mediática y política al joven presidente de Fevesa, el arqueólogo Chema Collados, protagonista de una contraportada de *El País* bajo el significativo título de «Las asociaciones de vecinos no son para el macramé».^[11] En concreto, Collados afirmó: «Las asociaciones de vecinos están para luchar, las habíamos convertido en sitios de bailes y macramé». Esto no hace justicia a aquellas entidades —y no son pocas— que han mantenido el pulso reivindicativo desde el momento álgido del movimiento vecinal durante la transición. Sin embargo, las palabras del joven presidente de Fevesa sí reflejan una percepción, no exenta de base en algunos barrios y ciudades, instalada desde hace tiempo en el imaginario colectivo y que en 2007 empezó a resquebrajarse. ¿A qué, si no a un cambio políticamente significativo, debe atribuirse la coincidencia declarativa de Collados con alguien de generación, trayectoria y filiación tan distinta como el reelegido, en octubre de 2007, presidente de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía (CAVA), Antonio Viruez? Tras escogerse la junta andaluza, por primera vez en la historia de la CAVA por unanimidad, el dirigente vecinal destacó: «Deben darse cuenta de que ya no somos la organización que iba buscando arreglar el semáforo o el bache. Ya no somos meros organizadores de fiestas baratas. Esto se va acabando. Nosotros queremos hablar de infraestructuras, de dotaciones de barrios, queremos que se nos consulte. No hay nadie que sepa al dedillo cual es el estado de la ciudad como nosotros».^[12]

Quizá por ello Collados recibió alguna propuesta partidista tras el éxito de convocatoria de Fevesa. En cualquier caso, no es aislado, y sí muy significativo, ese recuperado interés de captar a dirigentes vecinales por parte, pero ya no exclusivamente, de la izquierda política más próxima a los movimientos sociales. Ni mucho menos se trata de que los partidos recurran a las asociaciones de vecinos para surtirse de cuadros, como hicieron al final de la transición. Pero sí de que implícitamente —aun contradiciendo

una práctica política que, pese a la retórica participativa, es cada vez más individualista y meramente formal, permeable sólo a lobbies o grupos de presión— los partidos reconocen la representatividad, capacidad e influencia de las asociaciones de vecinos. Aunque solo sea, en clave electoralista, para tratar de contentar a movimientos sociales que consideran cercanos o arrancar un puñado de votos colocando a personas vinculadas al movimiento vecinal en una lista. Esta práctica, nunca abandonada en comicios locales y en fuerzas a la izquierda del PSOE —como IU, ICV o EUiA, que en 1999 llegó a presentar como candidato a alcalde por Barcelona al dirigente vecinal Jordi Gasull—,^[13] ha sufrido un ampliado y significativo repunte. Sirvan de ejemplo tres casos de Barcelona: ERC incluyó como número siete de su lista a las municipales de 2007 a la presidenta de la Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample Trini Capdevila, destacada activista en contra del trazado del AVE por el centro de la capital catalana. Y el PSC, que en las municipales fichó como concejal a la arquitecta independiente y experta en mediación vecinal Itziar González, incluyó en su candidatura al Congreso del 9 de marzo de 2008, aunque lejos de los puestos de salida, al miembro de la junta de la FAVB y la Confavc Antonio Fortes.

Madrid y Barcelona, barrios por la democracia

Este recuperado reconocimiento —o instrumentalización, según el caso y según se interprete— del movimiento vecinal por parte de los partidos no es otra cosa que el negativo de la foto que muestra la renovada capacidad de este movimiento social para ejercer la acción política desde la ciudadanía. Imposibles de relatar aquí todas las luchas y experiencias vecinales, sirva de espejo una perspectiva comparada de lo sucedido en 2007 en Madrid y Barcelona. Es cierto que, como apunta el sociólogo Joan Subirats, en menos de diez años la evolución de ambas metrópolis ha sido tan dispar que «ni por tamaño, ni por capacidad de crecimiento, ni por posición en el contexto mundial de ciudades, Madrid puede seguir comparándose con Barcelona».^[14] Pero, y pese a tener incluso gobiernos municipales de signo distinto —mayoría absoluta del PP en la capital de España y gobierno en minoría de socialistas y ecosocialistas en la capital de Cataluña—, las experiencias de lucha vecinal de Madrid y Barcelona siguen compartiendo una escala parecida. Eso da a entender, al menos, que el encuentro *¿Somos Madrid? Barrios por la democracia*, promovido el 25 de febrero por más de 50 asociaciones de vecinos y entidades sociales de la periferia madrileña, lo introdujera el sociólogo y urbanista barcelonés Jordi Borja, actual colaborador de la FAVB y destacado teórico del movimiento vecinal en los setenta. La segunda edición del encuentro *¿Somos Madrid?*, el 25 de enero de 2008, repitió ponencia catalana precisamente de la mano del citado Subirats.

Puestos a comparar realidades, antes que nada hay que dejar constancia de que si el 2007 empezó en Madrid con la resaca y el estupor del atentado en la T-4 de Barajas con el que ETA rompió la tregua, justo un año después Barcelona abrió el 2008 enfrentándose, también con estupor ciudadano, a una operación antiterrorista que presuntamente evitó una masacre de activistas suicidas vinculados a Al Qaeda. En Madrid, la FRA-VM respondió en 2007 convocando junto con CCOO y UGT una gran manifestación, el 13 de enero, de rechazo al terrorismo y apoyo a las familias de los dos trabajadores ecuatorianos muertos por ETA. En Barcelona, tiempo habrá de analizar cómo afronta el movimiento vecinal las consecuencias que para la convivencia en el barrio del Raval y la ciudad entera puede tener el miedo irracional al otro, al vecino pakistaní, musulmán o simplemente inmigrante, al alza y en precarias condiciones de habitabilidad, trabajo e integración social como todo el colectivo de trabajadores recién llegados. El asesinato, en noviembre, del joven de Vallecas Carlos Javier Palomino a manos de un neonazi y las diversas manifestaciones vecinales y antifascistas que suscitó, no sólo en Madrid, en contra del racismo y la xenofobia muestran lo frágil que, sin llegar al extremo de las *banlieu* francesas, puede ser la convivencia en determinados barrios del Estado español.

Sin embargo, es en las luchas por la participación ciudadana y otro modelo de ciudad, dadas tanto en forma programática antes de las elecciones municipales como a posteriori a la hora de organizar los distritos y elaborar los nuevos planes de actuación municipal, donde Madrid y Barcelona presentan curiosamente más paralelismos para el movimiento vecinal: en ambos casos se visualiza como un actor con renovada capacidad de acción política desde la ciudadanía. El ejemplo más claro de ello es la crisis y cambio de presidente en la FRAVM. Los candidatos Ángel Pérez (IU), Alberto Ruiz-Gallardón (PP), Rafael Simancas y Miguel Sebastián (PSOE) asumieron públicamente y por escrito antes del 27 de mayo algunas demandas del movimiento vecinal, como por otra parte era habitual en campaña electoral. Pero, por contradecir de algún modo el espíritu de la campaña *Barrios por la democracia*, la complaciente escenificación del acuerdo con Gallardón le costó el cargo al veterano Francisco Caño, que oficialmente

dimitió «por razones estrictamente personales y familiares», substituido por el joven Ignacio Murgui. La FRAVM salió al paso de la polémica reafirmando, en una resolución de la junta extraordinaria del 23 de mayo, su compromiso con «la independencia política y el apartidismo» del movimiento ciudadano y la trayectoria histórica de las asociaciones de vecinos: «No es otra que la presión y la negociación, la movilización de los vecinos y vecinas para conseguir desde la democratización de la política y la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones, hasta el máximo y mejor equipamiento de nuestros barrios, el reequilibrio territorial, las políticas de discriminación positiva a favor de los colectivos sociales precarizados, la vivienda protegida, los servicios públicos, la protección del medio ambiente, pasando por la rehabilitación de los cascos históricos y los poblados deteriorados, la integración social de los inmigrantes, la lucha contra el cambio climático...».

Pero si se dio la crisis de Madrid es porque los políticos buscaron la foto con la FRAVM. ¿Por qué? Por la misma razón por la que los candidatos a la alcaldía de Barcelona no pudieron rehuir, aunque en privado manifestaran su deseo de hacerlo, el duro y crítico debate electoral que cada cuatro años organiza la FAVB. A saber: el movimiento vecinal sigue pintando más de lo que se admite y administraciones y partidos reaccionan contradictoriamente entre el abrazo interesado, la zancadilla traicionera y el apoyo justo a un interlocutor válido pero del que políticamente temen mayores grados de participación y crítica democrática. De eso se trata cuando, tanto en Madrid como en Barcelona, las asociaciones de vecinos siguieron denunciando tras las elecciones del 2007 que se usurpa la voluntad democrática al impedir la elección directa de las juntas o plenos de distrito. De eso se trata cuando, llenándose la boca de participación, incluso ayuntamientos de izquierdas equiparan en debates propositivos como el del plan de acción municipal de Barcelona la contribución de un ciudadano individual inducida vía encuesta, e-mail o sms a la de colectivos organizados, reflexivos y de acción como las asociaciones de vecinos. De eso se trata cuando los movimientos sociales se quedan prácticamente solos denunciando grandes operaciones especulativas que hipotecan un futuro alternativo para las ciudades o agreden al territorio, llámense esos proyectos Seseña, Las Vegas de Los Monegros, La Manga del Mar Menor, Andratx, plan Caufec o recalificación del campo del Barça.

Es un mal síntoma que, en diciembre de 2007, y en base a la polémica ordenanza cívica de Barcelona cuyo modelo intervencionista y represivo se está extendiendo a muchas otras ciudades, la Associació de Veïns del Poblenou fuera multada por colgar con adhesivo carteles fotocopiados en DIN-A3 llamando a una manifestación de barrio en defensa de la total conservación y otros usos del complejo industrial de Can Ricart. Aunque, en una doble lectura optimista, ello se puede interpretar como que a los poderes públicos y privados les asusta que una simple reivindicación vecinal, local, ponga en cuestión todo un modelo urbano e incluso de sociedad, global, contribuyendo a hegemonías culturales y políticas alternativas hacia otras ciudades y otro mundo posibles.

Es por ello que la presidenta de la FAVB, Eva Fernández, propone hablar de acción política desde la ciudadanía más que de acción comunitaria desde los barrios: «Tanto más cuando partimos de que esta apropiación de la acción política de la ciudadanía organizada es clave para la necesaria renovación de la política. Las asociaciones de vecinos, en su condición de entidades territoriales, estarían en una posición privilegiada para promover el cambio, a condición, eso sí, de que apuesten de forma decidida por democratizar sus prácticas y abrirse al trabajo en red con el resto del tejido asociativo de los barrios y de la ciudad».^[15] Para lograrlo, apunta Fernández, al movimiento vecinal le hace falta recuperar la conciencia de su papel social y político, reconstruir su mermada autoestima y afrontar los retos actuando en red y venciendo los peligros del populismo. Algo que, aun modestamente, empezó a hacer en 2007. Y que, en la perspectiva del 2009, cuando se conmemorarán 30 años de unas primeras elecciones municipales democráticas en las que fue clave el movimiento vecinal, podría trabajarse más en serio. Uno de los protagonistas de esa época de la transición, Jordi Borja, en un debate que la FAVB organizó en junio del 2007 para analizar las causas de la gran abstención en las elecciones de mayo, lanzó la idea de convocar una especie de «estados generales de la ciudad» —se refería a Barcelona pero podría ser también Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao u otras— para redefinir el compromiso y el contrato social de la ciudadanía organizada con la democracia a nivel local. De convocarse estos *estados generales*, lamentablemente ya no podrán participar en ellos dos barceloneses estrechamente vinculados a los orígenes e historia del movimiento vecinal y a la lucha por la democracia que murieron en 2007: el periodista Josep Maria Huertas y el escritor Paco Candel. Justo es cerrar este balance con su recuerdo.

* Periodista e historiador, Marc Andreu codirige la revista de la FAVB *La Veu del Carrer* y esredactor de *El Periódico de Catalunya*. Coautor del libro *Barcelona en lluita*, prepara una tesis doctoral sobre la historia del movimiento vecinal en la capital catalana.

[1] Fernández, Eva, «Movimiento vecinal, protesta, acción comunitaria o acción política desde la ciudadanía?», en Heras, Pilar (coord.) *Acció comunitaria i acció política*, Barcelona, 2008, Graó, en prensa.

[2] Ver la introducción de Colectivo Política en Red, *Repensar la política en la era de los movimientos y de las redes*, Barcelona, 2007, Icaria.

[3] Para un acercamiento comparativo y crítico a estos dos episodios de 1976, ver Andreu, Marc. «Quan el puny tapa la pancarta», en *L'Avenç*, nº 314, junio de 2006, Barcelona, pp. 42-43.

[4] Lo ilustra un artículo del secretario general de CCOO. Coscubiela, Joan. «Las lecciones de Cercanías», en *El Periódico de Catalunya*, 5 de diciembre de 2007, p. 8.

[5] Costas, Antón. «La rebelión ‘mileurista’», en *El País*, edición Cataluña, 6 de marzo de 2006.

[6] Fernández Durán, Ramon. «El debate sobre la locura inmobiliaria ha estallado, y ya no se frenará», en *Viento Sur*, n. 92, Madrid, junio de 2007.

[7] Ver el informe *Movimientos sociales en Andalucía (I)* publicado en *Diagonal*, 10-23 de enero de 2008, Madrid, pp. 12-13.

[8] Observatorio Metropolitano, *Madrid: ¿la suma de todos? Globalización, territorio, desigualdad*, Madrid, 2007, Traficantes de sueños, p. 26. Para los otros títulos citados: Delgado, Manuel, *La ciudad mentirosa. Fraude y miseria del modelo Barcelona*, Madrid, 2007, Catarata; Alfama, Eva (et y al). *Per una nova cultura del territori? Mobilitzacions i confictes territorials*, Barcelona, 2007, Icaria; Leiva, Enrique; Miró, Ivan, y Urbano, Xavier. *De la protesta al contrapoder. Nous protagonismes socials en la Barcelona metropolitana*, Barcelona, 2007, Virus.

[9] Andreu, Marc; Herranz, Elia, i Naya, Andrés (coord.), *Carrer. 15 anys / 100 números*, Barcelona, 2007, FAVB-Editorial Mediterrània.

[10] Así lo sostiene el trabajo predoctoral inédito de Facultad de Historia de la Universitat de Barcelona, Andreu, Marc. *Les veus del carrer. Barcelona i els moviments socials a partir de la revista de la FAVB (1991-2007)*, Barcelona, 2007.

[11] *El País*, contraportada de la edición nacional, 17 de enero de 2008.

[12] *CAVA Información*, n. 16, p. 7. 2007.

[13] Miembro de la asociación de vecinos de Gracia y activo en las juntas de la FAVB y la Confavc, Gasull obtuvo 8.941 votos (el 1,29%) y no entró en el ayuntamiento.

[14] Subirats, Joan, «Historia de dos ciudades», en *El País*, edición Cataluña, 20 de diciembre de 2007.

[15] Fernández, Eva, op. cit.